

SERIES TEMÁTICAS

La mayoría invisible

Esta serie temática aborda la brecha existente en términos de conocimientos, datos y sensibilización acerca de la relación entre el desplazamiento interno, los movimientos transfronterizos y de retorno.



“ATRAPADOS”

Buscando soluciones duraderas tras
el acuerdo de paz en Colombia

MARZO DE 2019

RECONOCIMIENTOS

Este estudio ha sido coordinado y redactado por Chloe Sydney, con el apoyo de Bina Desai y Elizabeth Rushing. Esta obra no habría sido posible sin el duro trabajo de los asistentes de investigación Laura López, Juana Riveros y José Cobos, que accedieron de manera voluntaria a asistir a IDMC con la labor de recopilación de datos, así como el de los voluntarios en línea de las Naciones Unidas, que ayudaron a contrastar las fuentes secundarias acerca de las soluciones duraderas en Colombia. Asimismo, nos gustaría agradecer a nuestros compañeros del Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés), la Unidad para las Víctimas del Gobierno de Colombia (UARIV) y la Asociación de Consultores y Asesores Internacionales (ACAI) por facilitar la investigación, así como a los cientos de participantes cuyas experiencias y visiones han quedado reflejadas en el presente informe.

Editor: Jeremy Lennard

Diseño y maquetación: Rachel Natali

Traductor: Luis Miranda

Imagen de portada: grafiti acerca de los helicópteros de ataque que sobrevolaron el barrio Comuna 13 durante la Operación Orión en Medellín en 2002. Créditos: IDMC/Chloe Sydney, noviembre de 2018

Imágenes: IDMC/Chloe Sydney, noviembre de 2018, salvo que se especifique lo contrario.

“ATRAPADOS”

Buscando soluciones duraderas tras
el acuerdo de paz en Colombia

MARZO DE 2019

TABLA DE CONTENIDO

Resumen	5
Introducción	7
Factores y causas del desplazamiento	11
La huida hacia adelante: “no me sentía seguro”.	15
Las condiciones del desplazamiento: “tuvimos que volver a empezar de cero”	17
Teoría y práctica de las soluciones duraderas	26
Conclusiones	30



Oswald perdió el pie derecho en la explosión de una mina. Ahora vive en una de las numerosas viviendas que ofrece el Gobierno de Colombia. Imagen: ACNUR Luisa Dórr, noviembre de 2017

RESUMEN

A finales de 2017, alrededor de 40 millones de personas fueron identificadas como desplazadas por conflicto o violencia a nivel mundial. Estas personas fueron desplazadas por las mismas razones que los refugiados y se enfrentan a retos similares para encontrar soluciones duraderas. A pesar de esto, en comparación con los refugiados, los desplazados internos siguen siendo la mayoría invisible.

Aunque la relación entre el desplazamiento interno, los movimientos transfronterizos y las soluciones duraderas no haya sido bien entendida, queda claro que muchos refugiados experimentan desplazamiento interno antes de cruzar las fronteras nacionales. De igual manera, muchos de los refugiados que retornan a su país de origen se encuentran de nuevo desplazados internamente. Este estudio del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC), que forma parte de una serie temática llamada La Mayoría Invisible, investiga la relación entre el desplazamiento interno, los movimientos transfronterizos y las soluciones duraderas en Colombia.¹

Basado en más de doscientas encuestas con desplazados colombianos dentro y fuera del país, el estudio se focaliza en las causas de los movimientos internos y transfronterizos, ofrece mayor comprensión sobre las prioridades y condiciones necesarias para el retorno, y analiza los obstáculos y oportunidades para encontrar soluciones duraderas. El informe no tiene como objetivo de evaluar los éxitos y fracasos del acuerdo de paz. Sin embargo, da luz sobre algunos desafíos en su implementación. A continuación, se presenta un resumen de las principales conclusiones del estudio.

A PESAR DEL ACUERDO DE PAZ, EL DESPLAZAMIENTO CONTINÚA

Durante décadas, el conflicto de tierras, agravado por el narcotráfico y la minería ilegal, han causado despla-

mientos masivos en Colombia. La extorsión y la persecución también han generado desplazamientos de menor escala. El acuerdo firmado por el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el 2016 tiene como objetivo acabar décadas de conflicto. Pese a avances en su implementación, para muchos colombianos la paz sigue siendo elusiva. Varios actores armados siguen activos y nuevas bandas criminales han aparecido, compitiendo por llenar el vacío dejado por las FARC.

DESPLAZAMIENTOS MÚLTIPLES RESULTAN EN MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS

Más de un tercio de los encuestados en este estudio fueron desplazados más de una vez. Estos desplazamientos múltiples suelen tener causas distintas, pero algunas personas tuvieron que huir dentro y fuera del país por la persecución incesante. Los movimientos transfronterizos ocurren cuando los desplazados internos no logran encontrar seguridad dentro de Colombia. Alrededor de dos tercios de los refugiados y retornados encuestados fueron desplazados internamente antes de huir el país.

EL DESPLAZAMIENTO AUMENTA LA VULNERABILIDAD

Las primeras fases del desplazamiento son especialmente difíciles. Tanto en Colombia como en países de destino, estas primeras fases suelen caracterizarse por hambre y desamparo. A muchos desplazados internos y refugiados les cuesta acceder a vivienda digna, empleo y servicios. El desplazamiento interno hacia las periferias de zonas urbanas puede también incrementar el riesgo de violencia, lo que puede resultar en más movimientos forzados.

RETORNOS INSOSTENIBLES RESULTAN EN MÁS DESPLAZAMIENTOS

Las condiciones difíciles durante el desplazamiento pueden incitar a algunos desplazados internos y refugiados a retornar, pero estos retornos son a veces prematuros y suelen ser insostenibles. Menos de un cuarto de los retornados encuestados estaban viviendo en sus zonas de origen, en parte debido a la inseguridad persistente. A pesar de promesas de asistencia para el retorno y la reintegración, pocos han recibido apoyo. Debido a los retos a los cuales se están enfrentando, casi un tercio de ellos tiene intenciones de salir nuevamente del país.

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY ES LENTA

Colombia tiene uno de los marcos legales más completos del mundo con respecto al desplazamiento interno. La ley contempla mecanismos sofisticados enfocados en la

asistencia, la indemnización y la restitución de tierras. Sin embargo, la magnitud del desplazamiento presenta un desafío para su implementación. Solo alrededor del diez por ciento de las víctimas han sido indemnizadas.²

Los resultados presentados en este informe sugieren que se debe tener una perspectiva matizada sobre el conflicto y el desplazamiento interno en Colombia que refleje adecuadamente la realidad. Información errónea sobre las oportunidades para el retorno y la reintegración puede resultar en retornos prematuros. De igual forma, parece haber falta de diseminación de información sobre los marcos legales sobre el desplazamiento interno en Colombia. Muchos de los desplazados que participaron en esta investigación demostraron una carencia de conocimiento en cuanto a los mecanismos a disposición para fomentar soluciones duraderas. Inconscientes de otras formas de apoyo, su principal fuente de preocupación fue el tiempo de espera para recibir indemnizaciones.



Grafiti en Medellín: A dónde van los desaparecidos? Busca en el agua y en los matorrales. Y por qué es que desaparecen? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido? Nunca más.

INTRODUCCIÓN

“Un grupo paramilitar entró en nuestro pueblo en el año 2000. No nos dejaban marcharnos, pero, tras tres meses, logramos escapar durante una batalla entre los paramilitares y un grupo de guerrillas. Los paramilitares se fueron, así que volvimos a nuestro pueblo. Sin embargo, nos enteramos de que habría más luchas pronto, por lo que volvimos a intentar huir... pero estallaron las luchas entre las guerrillas y el ejército, y nos quedamos allí atrapados”. Santiago

La elección del testimonio de desplazamiento que encabezaría la introducción de este informe fue todo un reto. La historia de Santiago no es un caso aislado; de hecho, ni si quiera se trata de su única experiencia como desplazado. Años después de los acontecimientos que describe, huyó a Argentina después de que lo amenazara una organización criminal. Volvió a Colombia en diciembre de 2016, pero sigue sin sentirse a salvo.

IDMC estima que más de 6,5 millones de colombianos vivían como desplazados internos en diciembre de 2017, constituyendo la segunda mayor cifra del mundo tras Siria. A pesar del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, el desplazamiento interno sigue siendo una realidad. En 2017, se registraron cerca de 139 000 nuevos desplazamientos asociados con el conflicto y la violencia.

El conflicto estalló en Colombia en los años sesenta con la formación de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) como respuesta a los elevados niveles de desigualdad socioeconómica y política, a la marginalización en la sociedad colombiana y a la violencia contra los grupos comunistas locales.³ Los grupos paramilitares de la derecha surgieron como respuesta a estos movimientos guerrilleros y operaban con la aprobación tácita —y, en ciertos casos, la colaboración directa— del Estado. En teoría creados como forma de defensa propia, los grupos paramilitares también han cometido numerosos abusos.⁴ El conflicto entre las fuerzas de seguridad, las

formaciones paramilitares y los grupos guerrilleros ha conducido a cifras de desplazamiento sin precedentes, con su mayor pico en 2002.⁵

La desmovilización formal de los grupos paramilitares que dio comienzo en 2003 y el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC en 2016 suponen logros considerables, pero no han logrado poner fin a la inseguridad. Muchos antiguos miembros de las formaciones paramilitares se han reagrupado para formar nuevas organizaciones criminales, y las facciones disidentes de las FARC que se opusieron al acuerdo de paz siguen activas, así como el ELN y el EPL.⁷ El estado permanente de violencia constituye una importante barrera para las soluciones duraderas así como los retos a la hora de implementar una legislación ambiciosa orientada a las personas afectadas por el conflicto.

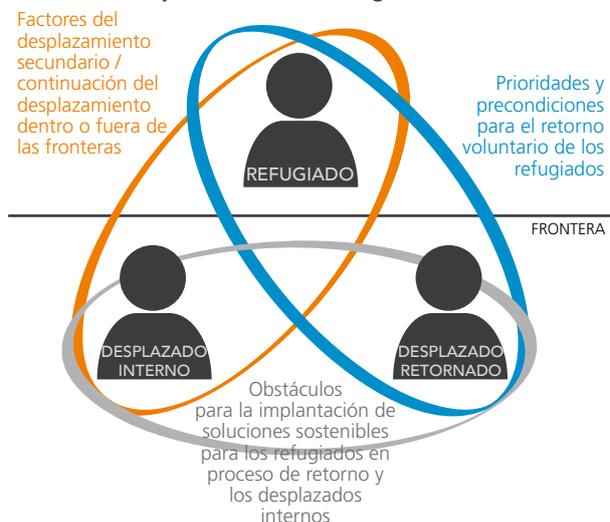
En este contexto, la crisis en Venezuela ha ocasionado asimismo el retorno de entre 300 000 y 500 000 refugiados y migrantes en situación de vulnerabilidad de origen colombiano.⁸ Ante la incapacidad para volver a su lugar de origen debido a la falta de seguridad o para hacer frente a las vulnerabilidades asociadas con su huida, muchos han vuelto a vivir como desplazados internos.

Este estudio analiza la relación entre el desplazamiento interno, los movimientos transfronterizos y las soluciones duraderas en Colombia, con los siguientes objetivos:

- | Examinar las causas del desplazamiento y los movimientos subsiguientes de los desplazados internos tanto dentro como fuera de las fronteras del país de origen.
- | Entender mejor las prioridades y precondiciones para el retorno voluntario.
- | Indagar en los obstáculos y oportunidades para alcanzar soluciones duraderas para los desplazados internos y los refugiados en proceso de retorno, así como evaluar el riesgo de desplazamientos subsiguientes.

| Apoyar las políticas y programas para alcanzar soluciones duraderas a lo largo del continuum del desplazamiento.

FIGURA 1: Objetivos de la investigación



METODOLOGÍA

Para la realización de este estudio, se ha adoptado un enfoque de método mixto, que incluye una investigación bibliográfica preliminar, una encuesta híbrida con un componente cualitativo y entrevistas cualitativas adicionales. La investigación se aplicó sobre desplazados internos, refugiados en proceso de retorno en Colombia y refugiados en Costa Rica.

| Investigación de antecedentes

Antes de proceder a la recogida de datos, se realizó una investigación bibliográfica exhaustiva para recopilar información acerca de la situación en Colombia y las poblaciones en cuestión, así como para identificar las investigaciones y datos existentes sobre el desplazamiento interno, los movimientos transfronterizos y las soluciones duraderas. Un equipo de voluntarios también llevó a cabo una evaluación del progreso hacia la consecución de soluciones duraderas en consonancia con los criterios establecidos por el Comité Permanente entre Organismos (IASC en sus siglas en inglés) en su marco de soluciones duraderas.⁹

CUADRO 1. ESTIMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

Las estimaciones de IDMC acerca de los desplazados internos en Colombia se basan en los archivos del Gobierno, que registran todas las víctimas de conflictos en el país. Desde 2017, las cifras de IDMC no contemplan a aquellos desplazados internos que han superado la vulnerabilidad asociada a su desplazamiento, a partir de las evaluaciones realizadas por la Unidad para las Víctimas, que tiene en cuenta factores como la vivienda, la educación, la documentación o el empleo. No obstante, se otorga una condición distinta a quienes únicamente logran cubrir las necesidades asociadas a la vivienda, pero siguen enfrentándose a retos en otras áreas, ya que se reconoce que su progreso hacia una solución duradera todavía no supone la finalización completa del desplazamiento. Como resultado de la adopción de este enfoque, las estimaciones de IDMC se encuentran por debajo de las cifras oficiales del Gobierno.

| Estrategia de muestreo

La selección de las áreas en las que se desarrollaría el trabajo de campo se basó en la accesibilidad, la disponibilidad del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) o los socios locales, y los riesgos potenciales tanto para los investigadores como para los participantes en la investigación. Se incluyeron distintas zonas de Colombia para aumentar la diversidad de la muestra, de modo que se recopilaron datos en Cúcuta (Norte de Santander), Medellín (Antioquia) y Soacha (Cundinamarca). La investigación con refugiados colombianos se desarrolló en la ciudad de San José en Costa Rica.

| COLOMBIA





Debido al reto que supone realizar una investigación con poblaciones de difícil acceso, los participantes se seleccionaron a través del muestreo por conveniencia combinado con técnicas de muestreo no probabilístico basadas en el conocimiento local y las redes sociales de los investigadores, personal asociado y participantes.

La mayor parte de las entrevistas en Colombia se realizaron en centros de atención de la Unidad para las Víctimas del Gobierno (UARIV), a las que una gran cantidad de personas acude a diario para procesar las solicitudes de asistencia e indemnización. En Costa Rica, el estudio contó con el apoyo de la Asociación de Consultores y Asesores Internacionales (ACAI), que identificó e involucró participantes entre antiguos beneficiarios de sus proyectos. Asimismo, se realizaron entrevistas por teléfono a algunos refugiados en proceso de retorno inscritos en el registro único de víctimas de Colombia, a partir de los datos de contacto ofrecidos por NRC.

Se hizo todo lo posible por maximizar la diversidad de la muestra mediante la inclusión de participantes de distintas edades, género y situación socioeconómica. Para proteger la identidad de los participantes, sus nombres no se grabaron durante el proceso de recolección de datos y, por tanto, todos los nombres que aparecen en este informe son ficticios.

| Recogida de datos

La recogida de datos se llevó a cabo en noviembre de 2018. Las entrevistas fueron realizadas por asistentes de investigación a través de KoboToolbox, herramienta desarrollada por la Harvard Humanitarian Initiative para realizar investigaciones en entornos complicados. Con anterioridad al proceso de recopilación de datos, los asistentes de investigación siguieron una formación acerca de los objetivos y el discurso de la encuesta, el uso del *software* y las técnicas cualitativas y cuantitativas de recogida de datos.

El cuestionario se estructuró en cinco secciones. Las preguntas variaban en cierta medida en función del tipo de persona a la que se realizaba la entrevista, aunque

se estandarizaron lo máximo posible para posibilitar la comparación entre distintos grupos de población. Estas cinco secciones eran las siguientes:

- | Demografía: características personales del entrevistado, incluyendo edad, nivel de estudios y estado civil.
- | Desplazamiento: resumen de las causas y los movimientos realizados.
- | Condiciones en las comunidades de acogida: incluyendo las condiciones de alojamiento, oportunidades económicas, acceso a servicios y seguridad.
- | Condiciones en las comunidades de origen: incluyendo las condiciones de alojamiento, oportunidades económicas, acceso a servicios y seguridad.
- | Soluciones duraderas: barreras, oportunidades, aspiraciones personales y acceso a mecanismos.

Asimismo, se solicitó que los asistentes de investigación tomaran notas acerca de las vivencias que compartieran los participantes para complementar los resultados de la encuesta con datos cualitativos. El resultado fueron más de 150 páginas de historias de una gran riqueza que arrojaron luz acerca de la variedad y la complejidad de las trayectorias y experiencias del desplazamiento. Se desarrollaron un total de 198 encuestas y también se contó con 10 participantes adicionales que tomaron parte en entrevistas puramente cualitativas.

Además, se realizaron cinco entrevistas semiestructuradas con personal de las autoridades locales y de ONG.

TABLA 1: Observaciones de la encuesta

Población	Encuestas	Entrevistas cualitativas
Refugiado en proceso de retorno	49	1
Desplazado interno	124	1
Refugiado	25	8
Otro	-	5
Total	198	15

LIMITACIONES

Los resultados de la investigación ofrecen una panorámica valiosa acerca de los conocimientos, experiencias, actitudes y aspiraciones de los participantes; no obstante, la muestra no es representativa. Los resultados presentados únicamente son válidos para los participantes en el estudio y no deberán extrapolarse al conjunto de la población desplazada en Colombia. Esto es, decir que un porcentaje “x” de los refugiados que participaron en la encuesta se encontraban en situación de desplazados internos antes de abandonar el país no implica que el mismo porcentaje del conjunto de refugiados colombianos se hubiera visto desplazado internamente con anterioridad. De este modo, este informe ofrece pocas estadísticas y se basa fundamentalmente en las historias personales de los participantes, de carácter cualitativo.

Dada la naturaleza de la muestra, también existe riesgo de sesgo en los resultados. Puesto que la mayor parte de las entrevistas en Colombia se realizó en los centros de atención de la Unidad para las Víctimas, el estudio se centró en gran medida en las víctimas registradas que solicitaban apoyo y, por tanto, no incluye a aquellos desplazados internos que no buscaban apoyo, ya fuera porque quizá contaban con capital social y financiero suficiente. Igualmente, la mayoría de las entrevistas en Costa Rica se llevaron a cabo con colombianos que en algún momento habían acudido a ACAI en busca de apoyo, por lo que quienes llegaron con suficientes recursos financieros o redes personales sólidas se encuentran infrarrepresentados en la muestra.

Tampoco es probable que el estudio incluya desplazados internos que se hubieran negado a inscribirse en registro único de víctimas, por razones como la preocupación por su seguridad, falta de información o dificultad de acceso. Por último, tampoco es probable que los refugiados que han vuelto a través de canales no oficiales y han escogido no inscribirse en el registro aparezcan representados en la muestra.

FACTORES Y CAUSAS DEL DESPLAZAMIENTO

El conflicto en Colombia surgió en un contexto de elevada desigualdad. El país ha realizado progresos considerables desde que las guerrillas alzaran por primera vez las armas a principios de los años sesenta. La renta nacional bruta, basada en las tasas de paridad del poder adquisitivo, ha aumentado en más de un 200% desde 1990.¹⁰ El índice de desarrollo humano del país también se ha incrementado desde un 0,592 hasta un 0,747, lo que lo sitúa en la categoría de desarrollo "alto".¹¹ La proporción estimada de población que vive por debajo del umbral de pobreza descendió desde casi un 50% a principios de milenio hasta situarse ligeramente por encima del 25% en 2017.¹²

A pesar de estas mejoras, el Informe sobre la Desigualdad Global indica que los niveles de desigualdad siguen siendo obstinadamente elevados.¹³ La brecha es especialmente profunda al comparar las áreas urbanas y las rurales. Más allá del panorama que ofrecen las medias nacionales, un 36% de la población rural sigue viviendo por debajo del umbral de pobreza, en comparación con el 15,7% de la población urbana.¹⁴ Asimismo, las comunidades rurales también se enfrentan a mayores retos en cuanto al acceso a los bienes y servicios públicos. Por ejemplo, se considera que menos de la mitad de la población rural tiene acceso a los servicios de recogida de basura.¹⁵

La distribución de la tierra constituye otro factor de desigualdad y sigue siendo un importante punto de contención. El 1% de los terratenientes concentra más del 80% de los terrenos,¹⁶ lo que se ha exacerbado con la desposesión de tierras a las comunidades rurales en el contexto del conflicto armado. Según el Ministerio de Agricultura de Colombia, "entre 1985 y 2008, se robaron, abandonaron o traspasaron de manera forzosa en torno a 6,5 millones de hectáreas (16 millones de acres) de tierras, incluyendo algunas de las más fértiles, como resultado del conflicto".¹⁷

El tráfico ilegal de estupefacientes fomenta el desplazamiento, ya que los grupos armados luchan por el control de las plantaciones y las rutas de distribución. A pesar de los importantes esfuerzos de erradicación, la pobreza rural aumenta la dependencia de las comunidades del cultivo de cocaína, que suele suponer la oportunidad más lucrativa de generación de ingresos en áreas que se habrían visto marginadas de no ser así.¹⁸ "En la región de Catatumbo, esta es la única forma de ganar dinero", dice Luciana, antigua cultivadora de cocaína. La presión de los actores armados no estatales para cultivar cocaína también ha supuesto la proliferación de amenazas, asesinatos y desplazamientos. Una reforma comprensiva del mundo rural es uno de los principales ingredientes del acuerdo de paz de 2016, que también tiene en cuenta el problema del tráfico ilícito de estupefacientes.¹⁹

Estos factores subyacentes resultan en toda una gama de amenazas que provocan el desplazamiento.²⁰ Muchos de los participantes en la investigación se habían visto desplazados por grupos armados que buscaban hacerse con el control de sus tierras o debido a los enfrentamientos armados entre grupos. Algunos habían sido víctimas de persecuciones y habían recibido amenazas de muerte por haber intentado llevar dichos delitos ante la justicia, mientras que en el caso de otros esto se debía a su presunta afiliación a grupos armados o partidos políticos, así como a su orientación sexual. La extorsión y el miedo al reclutamiento forzado también eran determinantes comunes para el desplazamiento. En el siguiente apartado se examinan estos factores con más detalle.

DESPOSESIÓN

La competencia entre los grupos armados por el control del territorio, sobre todo para el cultivo de cocaína y

el tráfico de drogas, aunque también para la minería ilegal, ha provocado que el desplazamiento se extienda por toda Colombia.²¹ Luciana se vio desplazada por las luchas entre guerrillas y grupos paramilitares por el control de las plantaciones de cocaína. Las tierras de Daniela, ricas en oro, fueron tomadas en primer lugar por el ELN y después las conquistaron los grupos paramilitares. Gabriela, que procede de un área de minas de esmeraldas, perdió a su padre y a su hermano a manos del grupo armado que se hizo con sus tierras.

En algunos casos, pueblos enteros se han visto obligados a huir debido a que los grupos armados buscaban hacerse con el control de la zona. Mateo recuerda: “Uno de mis hermanos se negó a marcharse, y ocho días después lo mataron”. La vecina de Victoria fue otra de las víctimas: “Era una mujer mayor, y prefirió morir antes que abandonar sus tierras y vivir como desplazada.”

Para legalizar nominalmente las transacciones, los propietarios legítimos, como Mateo, en ocasiones se ven forzados a vender sus tierras a unos precios ridículamente bajos: “Tenía mi ganado, unas cuantas vacas, y cultivaba plátanos, maíz, café y caña de azúcar. Eran casi 200 hectáreas, y solo me dieron 300 000 pesos [menos de 100 dólares USD]”, explica.

RECLUTAMIENTO FORZADO

El miedo al reclutamiento forzado también ha provocado desplazamientos. Martina huyó cuando un grupo armado intentó reclutar a su hijo de 12 años. Lucía logró escapar tras haber sido forzada a trabajar como cocinera para las guerrillas. “Si no obedecías, te mataban y dejaban tu cadáver en la calle para que se lo comieran los perros”, afirma. Negarse a cooperar podía llegar a tener consecuencias terribles. Las FARC masacraron a toda la familia de Alejandro delante de los habitantes de su pueblo que se habían negado a alistarse.

A veces, a las niñas se las “recluta” con otros fines. Jimena abandonó su pueblo a los doce años porque tenía miedo de que la secuestraran de camino a la escuela. Los paramilitares se habían llevado a principios de año a la hija de Sara, de 16 años, y la habían violado, con el aviso de que, si no volvía a la noche siguiente, la matarían. Sara logró huir con su hija y ahora está en busca de apoyo psicológico.

EXTORSIÓN

La extorsión que ejercen las organizaciones criminales y los grupos armados era otra de las principales causas del desplazamiento entre los participantes en el estudio. Samantha tenía una tienda de muebles en Bogotá y se vio sometida a un impuesto ilegal denominado “vacuna”. Tras dos años en los que los cargos y las deudas no dejaron de aumentar, la situación se hizo insostenible y decidió huir. Y los empresarios no son los únicos afectados por este tipo de prácticas: Emma afirma que tuvo que pagar una “vacuna” para viajar por ciertas rutas e incluso para acceder a su barrio.

No pagar no es una opción. María José pagaba una vacuna por su negocio, pero terminó por quedarse sin dinero. Le dijeron que, si no se iba de la zona, matarían a sus hijos como represalia, igual que mataron a uno de los amigos de Sebastián por negarse a pagar.

PERSECUCIÓN

| La lucha contra la impunidad

Los esfuerzos por llevar a los responsables ante la justicia tienden a generar desplazamiento. Cuando Sebastián denunció el asesinato de su amigo, fue víctima de persecuciones y hubo de abandonar su hogar. Julieta trató de descubrir quién había asesinado a su hermano, y el grupo armado responsable le dio 72 horas para marcharse. Nicolás, cuyos padres habían sido secuestrados por las FARC cuando él era todavía un niño, terminó confirmándose como objetivo debido a sus esfuerzos por desvelar la verdad. Diego, cuyo padre había sido asimismo secuestrado por las FARC, sufrió un destino similar: “Me di cuenta de que estaba a punto de acabar como mi padre [...]. Un amigo me dijo que me fuera porque estaban planeando matarme”. Diego tenía tan solo 12 años en aquel momento.

Las acciones de los grupos armados para garantizar la impunidad de sus delitos a menudo implican la persecución de testigos. Samuel fue víctima de amenazas después de presenciar un asesinato. Del mismo modo, Benjamín, que fue testigo del secuestro de dos niños por el ELN y logró alertar a la policía a tiempo para rescatarlos, se enteró al poco tiempo de que las guerrillas planeaban matarlo y se vio obligado a huir al extranjero.

| Percepción de la afiliación

La percepción de la afiliación a una de las partes en conflicto o a otra es una causa común de persecución y desplazamiento. Daniel recuerda que un guerrillero le amenazó porque sabía que apoyaba a las fuerzas del Gobierno. “Me dijo que tenía 72 horas para marcharme o me cortarían la cabeza con su machete y la exhibiría a la entrada del pueblo a modo de advertencia para los demás”, cuenta. Joaquín, que ya se había visto desplazado en dos ocasiones por las guerrillas, sufrió más tarde persecuciones por parte de grupos paramilitares: “Nos dijeron que teníamos que marcharnos de la zona y nos acusaron de colaborar con las guerrillas. Muchas familias tuvieron que huir; nos consideraban partidarios de las guerrillas”.

La afiliación política también había sido causa de persecuciones y desplazamientos. El ejemplo más llamativo es el de la Unión Patriótica (UP), un partido político formado por las FARC y el Partido Comunista Colombiano como parte de un proceso de paz fallido en la década de 1980. Miles de cargos y partidarios del partido fueron asesinados, incluidos dos candidatos a la presidencia, lo que condujo a algunos a hablar de “genocidio político”.²² Lucas, que había sido consejero de UP, se vio desplazado después de que intentaran asesinarlo en 1995. Asimismo, Antonella decidió huir después de que asesinaran a un miembro de UP en su pueblo.

Los “líderes sociales”, un término que recoge una gran variedad de activistas comunitarios y defensores de los derechos humanos, también se han enfrentado a amenazas similares. Durante años, Renata sufrió persecuciones y amenazas por involucrarse en un grupo de apoyo a las víctimas. Se ha visto desplazada hasta en tres ocasiones y ha sido víctima de numerosos intentos de asesinato. En el último de ellos, le golpearon la cabeza, la metieron en una bolsa y la tiraron montaña abajo. Aunque el Gobierno le ofreció protección armada, renunció a ella tras el asesinato de su guardaespaldas.



José cultiva cacao en su finca en Cáceres, Antioquia, Colombia. Recibe apoyo de un programa de USAID que tiene como objetivo ofrecer alternativas al cultivo de coca. Foto: USAID/Thomas Cristofolletti, Febrero 2015

| Persecución por motivos de género

Algunos de los participantes habían sido perseguidos por su orientación sexual y su identidad de género. Emilia, que se identifica como mujer transgénero, se ha visto desplazada en cinco ocasiones desde que cumpliera 16 años. Asimismo, ha sido obligada a mantener relaciones sexuales a cambio de “permiso” para poder quedarse. Y sigue sintiéndose amenazada en la comunidad en la que reside actualmente. Por su parte, Natalia, que aspira a desarrollarse como hombre transgénero, se vio obligada a huir por el Clan del Golfo, un poderoso cártel de la droga formado por antiguos paramilitares. La violencia homófoba se ha extendido a lo largo de todo el conflicto armado; en 2015, 110 personas de la comunidad LGTB (personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero) fueron asesinadas en Colombia en 2015.²³

LA HUIDA HACIA ADELANTE: “NO ME SENTÍA SEGURO”

Más de un tercio de los entrevistados indicó que se había desplazado en más de una ocasión. Algunos regresaban tras el desplazamiento únicamente por verse forzados a huir de nuevo. Antes de que las FARC secuestraran a los padres de Nicolás, las guerrillas habían separado a su familia de su tierra en numerosas ocasiones. El día en que se llevaron a sus padres, habían recibido folletos que les advertían de que huyeran, pero estaban tan cansados de ser desplazados que decidieron quedarse.

Los continuos desplazamientos por parte de algunos de los entrevistados tuvo distintos desencadenantes. Mía huyó por primera vez cuando su hija presenció el asesinato de su padre, antes de volver a desplazarse tras recibir amenazas por haber denunciado las demandas de extorsión sufridas por su empresa. Gabriela se vio desplazada por primera vez a causa de los grupos paramilitares que buscaban hacerse con el control de la producción de esmeraldas en su área de origen; años después, se vería obligada a huir de nuevo debido a sus actividades empresariales en una zona controlada por las guerrillas.

OTROS DESPLAZAMIENTOS

En otros casos, los nuevos desplazamientos estuvieron causados por persecuciones incesantes, que en muchas ocasiones conducían al cruce de fronteras. Zoe y su marido se mudaron en varias ocasiones en busca de seguridad después de presenciar un intento de asesinato. Finalmente, decidieron abandonar el país después de que los responsables llegaran a su último barrio. Tomás también decidió huir a Costa Rica tras haberse visto desplazado internamente hasta en cinco ocasiones: “No me sentía seguro”, afirma.

Las amenazas que Daniela ha recibido son especialmente obstinadas. El ELN le quitó sus tierras a principios de los noventa y las FARC se las arrebataron al ELN más tarde. Dos décadas después, decidió ponerse en contacto con la agencia de restitución de tierras del Gobierno y, tras un mes desde el inicio del proceso, recibió una llamada que la convocaba a presentarse en su municipio de origen para tratar el asunto de la restitución. Sin embargo, cuando contactó a la agencia para confirmar la cita, no tenían registro de que aquella llamada se hubiera producido. Las investigaciones revelaron que sus tierras se encontraban entonces en manos de un poderoso grupo paramilitar que no estaba dispuesto a facilitar la restitución debido a que la zona era rica en oro. Daniela empezó a recibir amenazas y tuvo que entrar a formar parte de un programa de protección nacional.

Se la relocalizó en otra zona del país, donde sufrió un primer intento de asesinato, por lo que volvió a mudarse. Tras ello, uno de sus parientes fue asesinado y ella recibió una foto de su cadáver en su nueva dirección, así que huyó por tercera vez. Tras recibir advertencias fiables de que su guardaespaldas estaba conspirando con los paramilitares para asesinarla, finalmente decidió abandonar el país. “No quería irme de Colombia, amo a mi país”, asegura. No obstante, el exilio no supuso el fin de las persecuciones; sigue recibiendo amenazas en Costa Rica y está volviendo a tener que considerar un nuevo desplazamiento.

FLUJOS TRANSFRONTERIZOS

Tres cuartos de los refugiados y los refugiados en proceso de retorno que fueron entrevistados para el presente estudio ya habían sido desplazados internos en un primer lugar. La mayoría abandonaron el país porque no habían logrado encontrarse seguros a pesar de sus desplazamientos iniciales. Gabriel huyó primero a un pueblo cercano en el que volvió a sufrir amenazas, tras lo que se mudó a un centro urbano de mayor tamaño, en el que fue atacado. Finalmente, cruzó la frontera hacia Ecuador. Martín huyó a Bogotá tras negarse a pagar una “vacuna”, pero las FARC no tardaron en encontrarlo: “Me dijeron que poco importaba en qué parte del país estuviera, ya que, si me negaba a cooperar, me matarían”, afirma. “Quería intentar vivir en mi país, pero cuando vi que esto no sería posible, tomé la decisión de marcharme”.

Algunos de los entrevistados, en concreto aquellos en zonas fronterizas de fácil acceso a los países vecinos,

se desplazaron al extranjero debido a las dificultades económicas que implicaba el desplazamiento interno. David se había visto desplazado de Catatumbo a Cúcuta a principios de la década de los 2000 y, de ahí, a Venezuela, donde la economía se encontraba en un mejor estado en el momento. Nicole huyó de Tumaco a otra ciudad en el departamento de Nariño antes de continuar su huida hacia Ecuador en busca de mejores oportunidades económicas.

No obstante, no todo el mundo tiene los medios o la motivación para salir del país. A pesar de haberse visto desplazada en numerosas ocasiones debido a su afiliación a la UP, Renata prefirió no mudarse a Canadá debido a que la solicitud de asilo no les habría sido concedida a todas sus hijas. Paula no tuvo elección, debía quedarse en Colombia: “Para viajar al extranjero hacen falta ahorros, pero yo no tenía”, dice. El coste del viaje puede suponer una importante barrera para el desplazamiento transfronterizo, y muchos refugiados se ven obligados a vender sus propiedades para financiarlo.

FIGURA 2: Los desplazamientos de Daniela



LAS CONDICIONES DEL DESPLAZAMIENTO: “EMPEZAR DE CERO”

Los desplazados, ya sea interna o internacionalmente, se enfrentan a la sobrecogedora tarea de reconstruir sus vidas. Sin embargo, a menudo las condiciones del desplazamiento suponen un reto en sí. Junto con las amenazas a la seguridad, los desplazados y refugiados entrevistados mostraron dificultades para acceder a una vivienda digna, servicios básicos y un empleo.

DESPLAZADOS INTERNOS EN COLOMBIA

| Vivienda

Gracias a las progresivas políticas del Gobierno colombiano para combatir la pobreza extrema, los hogares en situación de vulnerabilidad pueden obtener viviendas sociales de manera gratuita. Cien mil viviendas se han puesto a disposición, un 70% de las cuales se ha asignado a desplazados internos.²⁴ No obstante, los beneficiarios tienen la responsabilidad de amueblar y equipar las casas que reciben. La única fuente de ingresos de Emiliano es el reciclaje informal, lo que implica que su vivienda familiar tiene el suelo de cemento, las ventanas rotas y pocos muebles; no obstante, se muestra agradecido de poder tener un techo sobre su cabeza: “Doy las gracias a dios cada día por que el Gobierno pudiera cedernos este hogar”, dice. Por otro lado, su vecino Agustín ha establecido una exitosa empresa de venta de “avena”, una popular bebida fabricada con este cereal, y se enorgullece de lo bien amueblada que tiene la casa.



Vivienda social en Soacha

Algunos de los proyectos de viviendas sociales se encuentran en áreas asoladas por la violencia y la inseguridad. Uno de los entrevistados había sido apuñalado ocho veces tras denunciar un delito a la policía. Amanda, que vive en su mismo edificio, también está preocupada por el extendido consumo de drogas en el barrio. Daniel vive en otro barrio, pero sus preocupaciones son similares: “Puedes ver a la gente practicar sexo, fumar marihuana o robar”, cuenta. “La policía no tiene ningún poder aquí; el domingo pasado, los echaron a machetazos... Algunos desmovilizados han empezado a hacerse con el control de algunos edificios y los jóvenes entran a formar parte de bandas”.

A pesar de las dificultades que experimentan algunos beneficiarios, su situación actual supone, por lo general, una mejora de las condiciones de vida que tenían anteriormente. Antes de obtener su vivienda, Daniel y Agustín vivían en Altos de la Florida, un sobrepoblado suburbio en las colinas de Soacha, con poco acceso a servicios básicos, como el saneamiento del agua, y criminalidad generalizada.²⁵ La falta de carreteras adecuadas también supone un problema; Daniel recuerda que una vez tuvo que ir al médico en burro: “No fue tan rápido como una ambulancia”, comenta.

Muchos de quienes no reciben viviendas sociales siguen viviendo en este tipo de asentamientos informales. Según el Ministerio de la Vivienda, casi un 30% del total de familias colombianas no contaban con viviendas adecuadas en 2013.²⁶ La casa de María Fernanda está hecha de barro; la de Juan Pablo, de plástico y madera. Juana vive en un espacio similar con sus siete hijos y siete nietos, sin acceso a agua potable. Comparte una letrina con otras casas y tiene establecida una conexión ilegal a la red eléctrica.

Manuela vive en la calle con su marido y su hijo. Han intentado refugiarse en albergues para indigentes, pero aquel no es lugar para una familia. Valentina tampoco tiene un hogar y se sigue constantemente insegura: “No me gusta hablar con la gente, no se puede confiar en nadie”, asegura. Hace poco le robaron el bolso y el móvil, por lo que lo único que le queda es la ropa que lleva puesta.



Barrio periférico de Medellín

Empleo y seguridad alimentaria

La tasa de desempleo total en Colombia se estima en un 9%.²⁷ Las personas procedentes de áreas rurales, que a menudo cuentan con un menor nivel educativo y carecen de competencias transversales, experimentan especial dificultad a la hora de encontrar trabajo en las zonas urbanas.

Asimismo, se enfrentan a un mayor coste de vida en dichas zonas, así como a una mayor dificultad de acceso a los recursos naturales, lo que afecta a su seguridad alimentaria. Algunas personas que antes podían cultivar sus propios alimentos y almacenarlos, o adquirirlos con cierta facilidad, se ven obligados a depender de familiares o amigos, así como de los servicios de asistencia humanitaria.²⁸ Tal como indica Paula, “el hambre es más habitual en las ciudades que en el campo”.

Aunque el empleo formal se ha incrementado en Colombia, más de la mitad de los trabajadores no agrarios del país seguían sin tener contrato en 2013.²⁹ Son pocas las alternativas a este tipo de trabajos para las personas desplazadas. Ana Sofía cuenta que “no hay oportunidades de empleo decentes, lo que, a su vez, contribuye a incrementar la desigualdad y fomenta la exclusión social”.³⁰

De hecho, incluso muchos de quienes consiguen asegurarse un empleo tienen dificultades para llegar a final de mes. Elena trabaja en turnos de doce horas en un restaurante por menos de diez dólares (USD) al día y tiene dificultades para cubrir sus gastos básicos. Andrés trabaja en el sector de la construcción, pero en ocasiones no puede permitirse comprar suficientes alimentos.

Asimismo, muchos de los entrevistados también indican que las oportunidades económicas se han visto aún más reducidas debido a la llegada de desplazados venezolanos que huyen de la deteriorada situación en la que se encuentra el país. Conforme aumenta la competencia por un trabajo que escasea, algunos desplazados colombianos afirman que les es más difícil encontrar un empleo. La integración de los venezolanos en el mercado laboral se considera un importante reto para Colombia, así como el riesgo de aumento de la xenofobia.³¹



Vendedor ambulante en Bogotá

| Acceso a servicios

Con una tasa de alfabetización por encima del 94% y una tasa de escolarización primaria cercana al 100%, es posible que la educación no suponga un reto del mismo calibre en Colombia que en otros países afectados por el desplazamiento.³² La mayor parte de los desplazados internos entrevistados afirmaban que sus hijos pudieron ir a la escuela, y la mayoría de ellos estaban satisfechos con la calidad de la educación ofrecida. Los participantes en el estudio sugerían que los retos relacionados con la educación eran, de hecho, más importantes en sus áreas de origen, lo que refleja la división del país entre el mundo rural y el urbano.

Del mismo modo, los desplazados internos entrevistados indicaban, por lo general, una mayor calidad de la sanidad en las comunidades de acogida que en sus zonas de origen. No obstante, más de un 90% de los colombianos tanto en áreas urbanas como rurales se encuentran afiliados a programas de salud.³³ La mayoría deben pagar contribuciones a la seguridad social, pero algunos hogares en situación de vulnerabilidad tienen acceso a cuidados sanitarios básicos a través del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN).³⁴

No obstante, esto no implica que todos los desplazados gocen de acceso sin restricciones a los servicios de salud. Valentina padece una dolorosa hernia, pero no ha podido registrarse en los servicios gratuitos, aunque tampoco puede permitirse pagar las cuotas de la seguridad social y aún menos el coste de la operación que necesita. “Cuando consigo algo de dinero, voy a la farmacia y compro analgésicos”, afirma.

REFUGIADOS EN COSTA RICA

| Estado legal

Costa Rica es un país conocido por contar con uno de los marcos jurídicos para la protección de refugiados más completo del mundo.³⁵ Debido a su estabilidad relativa, es el país que más personas recibe en Centroamérica. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en 2017 había más de 2300 refugiados colombianos en Costa Rica. De hecho, dado que muchos antiguos refugiados han obtenido el permiso de residencia o la ciudadanía, el número total de colombianos se eleva a una cifra mucho mayor.³⁶

Los refugiados en Costa Rica pueden solicitar un permiso de residencia de tres años tras obtener el estatus de refugiado. Además, pueden optar entre conservar su estatus de refugiados, lo que implica que no pueden volver a viajar a su país de origen, o renunciar a la protección para poder hacerlo. Asimismo, también pueden solicitar la ciudadanía tras cinco años en el país.

Algunos participantes en el estudio consideran que el acuerdo de paz de 2016 podría haber sido la causa del descenso percibido en el número de solicitudes de asilo concedidas. Bianca necesitó una escolta armada que la acompañara al aeropuerto cuando huyó de Colombia, pero su solicitud de asilo ha sido rechazada. Además, la reciente llegada en masa de nicaragüenses también puede llegar a retrasar el procedimiento.³⁷ Mía lleva casi tres años esperando a obtener la condición de refugiada. Ariana, que llegó hace poco a Costa Rica, dice que le han dado cita para junio de 2020. La situación de Rodrigo no es muy diferente: “Sigo en el limbo”, afirma.



Cartel sobre la solicitud de asilo en Costa Rica

Empleo

En Costa Rica, los refugiados tienen plenos derechos para trabajar, y los solicitantes de asilo pueden solicitar un permiso de trabajo tras tres meses en el país. Gracias a esta legislación, muchos colombianos han logrado reconstruir sus vidas en Costa Rica. Hace más de veinte años que Gabriela adquirió su peluquería, y Florencia compró su tienda de ropa hace más de diez. Una encuesta de 2018 acerca de los colombianos que viven en Costa Rica indicaba que el 63% sentía que su situación económica había mejorado desde que salió de Colombia.³⁸

No obstante, muchos de los refugiados y solicitantes de asilo que participaron en el presente estudio afirmaban que habían pasado hambre durante su primer año en Costa Rica. Samanta cuenta que “al principio fue muy difícil... Estábamos acostumbrados a vivir con cierta comodidad, pero tuvimos que volver a empezar de cero”. Rodrigo sigue esperando su permiso de trabajo, pero tiene pocas opciones: “Las únicas oportunidades de empleo que he encontrado son como vendedor ambulante”.

Asimismo, el derecho legal a trabajar tampoco garantiza un empleo. Carolina es un ejemplo de ello: “Llevo aquí tres años, pero no he conseguido posicionarme en el mercado laboral [...]. Estoy desesperada, porque necesito trabajar”. Camila lleva en Costa Rica desde 2001, pero aún trabaja como vendedora ambulante para llegar a fin de mes: “Creo que todo va más para peor que para mejor”, afirma.

Según las agencias que operan en Costa Rica: “Por mucha voluntad, capacidad y derecho a trabajar que tengan, los refugiados siguen enfrentándose a importantes barreras a la hora de acceder al mercado laboral. Las principales son la falta de conocimiento por parte de los empleadores acerca de su documentación y su derecho a trabajar; los mitos y malentendidos acerca de los refugiados; las escasas oportunidades de educación y las dificultades para reconocer los logros académicos; y la falta de información, que limita el acceso a los servicios bancarios y la seguridad social”.³⁹

Vivienda

Probablemente la vivienda sea uno de los mayores retos para los colombianos entrevistados en Costa Rica, para quienes el precio del alquiler es desproporcionadamente elevado de cara a las dificultades a las que se enfrentan en el mercado laboral. “Tenemos que pagar el alquiler en cinco días y todavía nos falta la mitad del dinero”, dice Carolina, actualmente desempleada. Benjamín, un hombre de la tercera edad que no puede trabajar desde que sufrió un infarto, recibe una ayuda de ACNUR para pagar el alquiler: “Sin ella, viviría debajo de un puente”.

A otros les cuesta encontrar alojamiento debido a la discriminación por parte de los propietarios.⁴⁰ Tomás recuerda que se negaron a alquilarle una habitación porque pensaban que todos los colombianos eran narcotraficantes, una percepción bastante extendida. “Ser colombiano conlleva estigmas, incluso aunque seas buena persona”, cuenta Maite. “La gente dice: ‘Oh, eres colombiana, así que debes de conocer a Pablo Escobar’. Es como un tatuaje. Agota, te mina la moral”.



Miriam y Ricardo, refugiados colombianos, hornean pan en su panadería familiar en San José, Costa Rica. Fotografía © ACNUR/Santiago Escobar-Jaramillo, agosto de 2017

| Acceso a servicios

En general, los participantes consideraban que Costa Rica ofrecía buenas oportunidades para sus hijos. Florencia cuenta que “es prácticamente cuestión de cruzar la frontera y ya están en la escuela”. La educación primaria y secundaria es gratuita y se considera de buena calidad; además, se ofrece servicio de comedor. Los padres también piensan que hay más oportunidades para continuar los estudios que en Colombia. La hija de Samantha fue la primera de la familia en ir a la universidad. No obstante, la educación superior no es gratuita y dos de los entrevistados tuvieron que pedir a sus hijos que dejaran temporalmente la universidad mientras ahorraban para pagar otro semestre.

Las políticas costarricenses a favor de la infancia implican que los niños tienen acceso preferente a la salud pública, aunque la situación de los adultos puede ser algo más complicada. Poco más de un 60% de los colombianos entrevistados que viven en Costa Rica en 2018 afirmaban tener acceso a la sanidad.⁴¹ La mayoría de las empresas están obligadas a cubrir con un seguro médico a sus empleados, pero los refugiados y solicitantes de asilo que dependen del trabajo informal o de contratos de un día no suelen quedar cubiertos, y muy pocos de ellos pueden permitirse pagar las primas mensuales por sí mismos.⁴² Sin seguro, el coste de la sanidad es elevado. Maite, desempleada, fue al hospital debido a un gran dolor en el cuello y le cobraron 130 000 colones (216 dólares, USD) por la consulta.

Aquellos cuyas solicitudes de asilo habían sido rechazadas cuentan que solo tenían acceso a la sanidad en caso de emergencia si su vida peligraba. Maite indica que “a no ser que tengas las tripas colgando, no te atenderán si no tienes los papeles en orden”. “Me pasa algo en el estómago, pero tengo que aguantar el dolor”, dice Blanca.

En algunos casos, la discriminación por parte de los empleados de los servicios sanitarios públicos parece ser también un problema. Cuando Sebastián intentó contratar una póliza de seguros, su solicitud fue rechazada debido a su nacionalidad. Mía también considera que los derechos de los refugiados y los solicitantes de asilo no siempre se entienden o se respetan: “Algunos funcionarios no reconocen nuestros derechos ni consideran que nuestros documentos sean válidos”, afirma.

| Seguridad

Tradicionalmente, Costa Rica se ha percibido como una zona segura en una región, por lo demás, rodeada de inseguridad. Sin embargo, los colombianos que llevan mucho tiempo en el país indican que se ha producido un aumento gradual de los delitos. Antonella explica: “Cuando llegué aquí me sentía muy segura, andaba por ahí con total tranquilidad. Pero ahora hay que llevar más cuidado”.

A pesar del aumento de la tasa de delitos, incluidos los robos y las agresiones, los participantes se sentían muchísimo más seguros en Costa Rica que en Colombia. “Puede que haya delitos, pero no tantos como en Colombia”, dice Ariana. Regina habla de forma similar: “Vivimos con más paz aquí. Nadie nos persigue ni nos extorsiona”. El 97% de los colombianos entrevistados que vivían en Costa Rica en 2018 indicaban sentirse más seguros en su país de acogida que en Colombia.⁴³

EL RETO DEL RETORNO

MOTIVOS PARA VOLVER

Algunos refugiados han decidido volver a Colombia, a menudo alentados por las percepciones de aumento de la paz y la estabilidad que no necesariamente reflejan la realidad. “Tras mucho tiempo fuera, queríamos volver”, cuenta Isabella, que volvió de Argentina en 2018.

Parece que los retornos continuarán produciéndose. De los veintidós colombianos entrevistados en Costa Rica, tres tenían la intención de volver y cuatro estaban planteándose la posibilidad de hacerlo en el futuro. Desgraciadamente, algunos retornos parecen estar motivados por expectativas falsas, así como por la dificultad de las condiciones en los países de acogida.

| Narrativas de paz

El acuerdo de paz ha ayudado a modificar las percepciones de Colombia en el extranjero, tal como muestra el aumento de turistas extranjeros. Sin embargo, algunos refugiados colombianos consideran que este optimismo está injustificado y acusan a los medios internacionales de equivocarse al informar sobre la realidad del país. Según Sofía, “hay muchas cosas que nunca saldrán a la luz precisamente para seguir engañando a los extranjeros”. Sebastián se muestra de acuerdo: “Lo que dicen en los canales internacionales de noticias es mentira... Esconden la verdad”.

Partiendo de la información que había recibido, Isabella se sorprendió por las condiciones que encontró en Colombia al volver de Argentina: “Pensaba que la cosa iba mejor; cuando estás en el extranjero oyes hablar del acuerdo de paz, pero siguen pasando muchas cosas”.

Valeria dice que “negar que siga existiendo el movimiento guerrillero es como tratar de tapar el sol con un

dedo”. No obstante, parece ser lo que están haciendo muchos gobiernos extranjeros. Los entrevistados en Costa Rica indican que se ha producido un aumento de los rechazos de solicitudes de asilo debido al acuerdo de paz.⁴⁴ Por tanto, estas narrativas de paz que no reflejan la realidad sobre el terreno podrían estar provocando retornos anticipados fruto de la desinformación, así como un descenso de las oportunidades de asilo.



Graffiti en Bogotá

| Expectativas de apoyo

En virtud de la Ley 1448 de 2011, generalmente conocida como la Ley de las Víctimas, los colombianos obligados a huir del país debido al conflicto armado tienen derecho a recibir apoyo para volver a Colombia y reintegrarse, incluyendo medidas de ayuda al acceso a los servicios de sanidad, vivienda, formación profesional y apoyo psicosocial y jurídico.⁴⁵ A tenor de esta ley, UARIV abrió en 2013 un registro de víctimas en el extranjero y colaboró con los países de acogida para facilitar la inscripción. Hasta ahora, se han registrado colombianos que viven en cuarenta y cinco países.⁴⁶ Asimismo, el acuerdo de paz de 2016 incluye medidas de asistencia y

acompañamiento al retorno de las víctimas desplazadas en el extranjero.⁴⁷ Aquellas personas que se desplazaron a otro continente sin ser víctimas del conflicto también tienen derecho a asistencia en el retorno en virtud de la Ley 1565 de 2012.⁴⁸

Muchos refugiados colombianos conocen estos mecanismos y, para algunos, la promesa de apoyo ha sido decisiva a la hora de tomar la decisión de volver. Sin embargo, en la práctica, solo un cuarto de los refugiados entrevistados en proceso de retorno aseguraba recibir asistencia.



Venta de bolívares y artesanía en las calles de Cúcuta

ACNUR puso a Michelle al corriente de la legislación y le explicó los beneficios del retorno mientras vivía en Ecuador. Ella cuenta que le prometieron un pago en efectivo por valor de 1,5 millones de pesos (477 dólares, USD) y otros medios de apoyo. Sin embargo, cuando volvió a Colombia recibió menos de la mitad de la suma prometida y no obtuvo ningún tipo de asistencia complementaria. Explica que “nadie conoce esta ley y no están interesados en implementarla”. Vicente tuvo aún menos suerte. UARIV se puso en contacto con él mientras estaba en Ecuador para ofrecerle apoyo en el retorno, pero todavía no ha recibido nada desde que volvió a Colombia. Dice que no habría vuelto de haberlo sabido.

La experiencia de Alma fue similar. Después de que su solicitud de asilo en Ecuador fuera rechazada, UARIV le explicó las ventajas de volver, incluyendo el transporte a su zona de origen, mes y medio de salario, apoyo a la vivienda, oportunidades de empleo e indemnizaciones. ACNUR también se ofreció a facilitar la reubicación en un tercer país, pero los plazos eran tan grandes que optó por volver a Colombia. Sus hijos no iban a la escuela y ella quería que retomaran su educación. Volvieron a Colombia en marzo de 2016 y, aunque recibió el salario prometido, eso fue lo único que obtuvo: “Me prometieron muchas cosas, pero no han cumplido su promesa”. En este momento desearía haber esperado a que la reubicaran.

Otros volvieron a Colombia con la esperanza de recibir una indemnización a la que, en realidad, tenían derecho mientras se encontraban en el extranjero. Fernando volvió porque lo contactaron a él y a su familia para contarles que recibirían una indemnización si volvían, pero todavía no les han dado nada. Javier y su mujer también recibieron una llamada de UARIV mientras estaban en Brasil que les prometía una indemnización si volvían. De hecho, Javier sí que la ha recibido, pero su mujer no. Habían planeado utilizar el dinero para construirse una casa en Brasil, pero con una sola indemnización no les es suficiente.

CUADRO 2: RETORNOS FORZADOS

Tras un incidente de seguridad en la frontera entre Colombia y Venezuela en 2015, Caracas ordenó la deportación de miles de colombianos con el pretexto de reducir la inseguridad causada por los grupos paramilitares colombianos. Más de 1700 colombianos fueron deportados y se calcula que otros 22 000 volvieron de manera “voluntaria” por miedo a la deportación y los abusos.⁴⁹ David se vio obligado a volver por las fuerzas de seguridad venezolanas debido a su supuesta afiliación a grupos paramilitares, a pesar de haber huido de Colombia hacía más de una década para escapar precisamente de las amenazas de estos grupos. Dejó Venezuela con lo puesto, sin posibilidad siquiera de llevar una maleta. Originario de Catacumbo, no ha podido regresar a su comunidad de origen debido a la inseguridad persistente.

| Condiciones difíciles

La dificultad de las condiciones en los países de acogida son otro motivo importante del retorno. Isabel lleva una década trabajando como vendedora de helados en Venezuela, pero ahora se plantea volver a Colombia por el aumento del coste de las materias primas y el descenso de la demanda. Y no sería la primera en hacerlo. Entre 300 000 y 500 000 colombianos han regresado de Venezuela desde que la crisis estallara en 2010, incluyendo seis de los entrevistados para este estudio.⁵⁰ Entre ellos, se encuentra Manuel, que no duda en afirmar que se habría quedado en Venezuela de no haber sido por la crisis.

Venezuela no es el único país del que vuelven los refugiados. Uno de los participantes volvió desde España cuando perdió su empleo durante la crisis, y otros dos volvieron de Ecuador debido a la falta de oportunidades económicas. Olivia vivía en una situación de pobreza tan extrema en Chile que sus hijos sufrían malnutrición y tenían que dormir en un albergue para indigentes. Cuando uno de ellos cayó enfermo debido a las chinches, decidió volver a Colombia.

Aunque relativamente son pocos los colombianos que han vuelto de Costa Rica, la mayoría de los que lo hicieron fue porque no lograban encontrar un trabajo decente.⁵¹ Catalina es un ejemplo de ello. Algunos de los refugiados entrevistados en San José también se planteaban volver. “Es tan difícil... Siempre dije que no volvería jamás, pero mi situación actual aquí es crítica”, relata Antonella. Sofía también se ha planteado a rega-

ñantes volver a Colombia: “Si tuviera oportunidades aquí, no volvería nunca”.

Los desplazados internos suelen regresar por razones parecidas, motivados por la dificultad de las condiciones en sus comunidades de acogida y a pesar de la inseguridad persistente en sus áreas de origen. “Prefiero morir dignamente de un balazo que de hambre en las calles de la ciudad”, indicaba un participante en un estudio anterior.⁵² Este tipo de testimonios refuerzan la importancia de cubrir las necesidades básicas de los desplazados para evitar los retornos prematuros, inseguros e insostenibles.

CUADRO 3: BARRERAS AL RETORNO

No todos los refugiados que desean volver a Colombia pueden hacerlo. El miedo a las persecuciones y la inseguridad en sus zonas de origen suponen una barrera para algunos, además de que el coste del viaje es prohibitivo para aquellos en una situación económica de vulnerabilidad. A Benjamín le gustaría volver a casa con su mujer y su hija a pesar de las insistentes amenazas del ELN, pero no puede permitírselo y le preocupa convertirse en una carga para su familia si no recibe un apoyo adecuado por parte del Estado. Cuenta que “les estaría quitando la comida de la boca a mi mujer y mi hija”. Ya en la tercera edad, sin capacidad para trabajar y alejado de su familia, Benjamín sufre depresión severa y explica que ha intentado suicidarse.



Cruzando la frontera de Venezuela hacia Colombia

SOSTENIBILIDAD DEL RETORNO

Menos de un cuarto de los refugiados entrevistados en proceso de retorno viven actualmente en sus áreas de origen, sobre todo por miedo a la inseguridad persistente. “Todos los días matan a alguien allí. La situación en Colombia no ha mejorado para nada”, explica Sergio, que ha vuelto de Ecuador, pero no se atreve a regresar a su zona de origen.

En general, la situación ha mejorado. La tasa de homicidios del país ha descendido de 65 por cada 100 000 habitantes en el año 2000 a poco más de 25 en 2016.⁵³ A pesar de este progreso, más de doscientos líderes sociales han sido asesinados desde el acuerdo de paz.⁵⁴ Eduardo, que ha retomado sus actividades sociales desde su regreso a Colombia, ha recibido numerosas amenazas y debe cambiar de barrio a menudo.

Otros retornados también se han vuelto a ver desplazados tras su regreso. Miguel volvió de Venezuela debido a la crisis y se instaló en una nueva ciudad debido a las amenazas persistentes en su pueblo de origen. A pesar de sus intentos por pasar inadvertido, volvió a recibir amenazas del ELN y se vio obligado a desplazarse de nuevo.

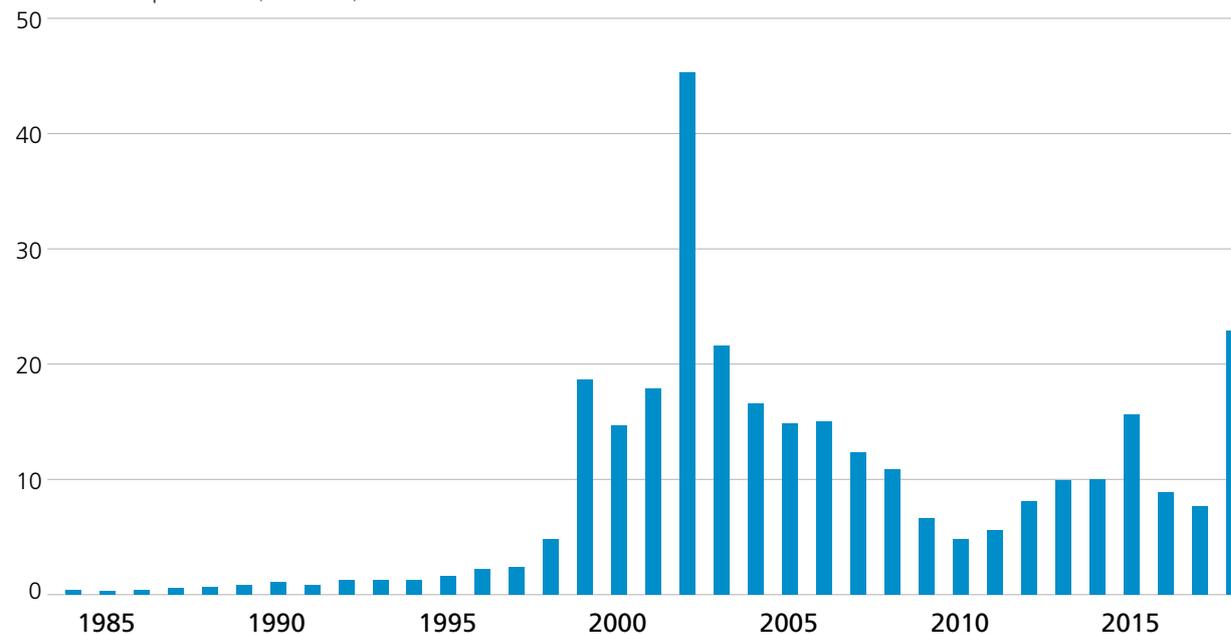
La escala de los nuevos desplazamientos asociados con el conflicto en 2018 pone de manifiesto que, a pesar de las promesas del acuerdo de paz, el número de víctimas no ha dejado de crecer. Los datos preliminares, que casi con seguridad suponen una infraestimación, indican que durante este año se produjeron en torno a 87 000 nuevos desplazamientos.⁵⁵ Trece de los participantes en el estudio se encontraban entre ellos. Mariana dejó su hogar en Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, para huir de las luchas entre el EPL y el ELN. Los desplazamientos en el departamento han alcanzado su nivel más alto desde 2002.

Además de la inseguridad, son muchos otros los retos a los que se enfrentan los refugiados en proceso de retorno. Carla tenía su propia empresa en Venezuela, pero ahora casi no consigue llegar a fin de mes. Gasta prácticamente la totalidad de sus escasos ingresos en el alquiler y el pago de facturas. Su hijo, que estudió ingeniería civil en Venezuela, trabaja como encargado de mantenimiento porque su diploma no está reconocido en Colombia.

Debido a estas barreras para la implantación de soluciones duraderas, casi un tercio de los refugiados entrevistados en proceso de retorno aspiran a volver a marcharse del país. Jorge planea comprar un billete de avión al extranjero cuando finalmente reciba su indemnización.

FIGURA 3: Nuevos desplazamientos en el departamento de Norte de Santander.

Personas desplazadas (en miles)



Fuente: registro único de víctimas

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LAS SOLUCIONES DURADERAS

Colombia posiblemente cuenta con el marco jurídico más comprensivo del mundo en materia de desplazamiento interno, y el concepto de la protección de los desplazados internos es anterior a la adopción de los Principios Rectores del Desplazamiento Interno. La Ley 387 de 1997 reconoce la responsabilidad del Estado de “formular las políticas y adoptar las medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección y consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia”.⁵⁶

Este marco jurídico se ha completado mediante leyes, decretos y reglamentos adicionales.⁵⁷ La más importante es la Ley 1448 de 2011 (Ley de las Víctimas) que, entre otras cosas, hace hincapié en el derecho de las víctimas a recibir asistencia y una indemnización, incluyendo compensaciones y la restitución de tierras.⁵⁸ Dado que se aplica tanto a las víctimas que se encuentran en el país como a las que están en el extranjero, se trata de uno de los pocos ejemplos de marco de soluciones duraderas que cubre todas las fases del *continuum* del desplazamiento.

Las indemnizaciones constituyen asimismo en el núcleo del acuerdo de paz de 2016 que, entre otras medidas, menciona el derecho de las víctimas a la restitución, compensación y rehabilitación.⁵⁹

A pesar de los sofisticados mecanismos disponibles para fomentar la implantación de soluciones duraderas, la realidad es bastante más compleja. Lucía admite desconocer sus derechos: “Vengo a hacer cola en la Unidad para las Víctimas y espero a que me proporcionen asistencia, pero en realidad no sé nada acerca de mis derechos o de los mecanismos jurídicos disponibles para las

personas como yo, que nos hemos visto obligadas a abandonar nuestra tierra a causa del conflicto”.

El acceso a los derechos supone a menudo un reto incluso para aquellos que los conocen. Con más de ocho millones de víctimas en el registro, las instituciones colombianas no dan abasto. En el siguiente apartado, se examinan las disposiciones para asistencia, indemnización y restitución de tierras tanto en la teoría como en la práctica.

ASISTENCIA

Las víctimas tienen derecho a recibir asistencia humanitaria para superar las vulnerabilidades relacionadas con el desplazamiento, lo que incluye asistencia médica y psicológica, alojamiento temporal, alimentación y productos no alimentarios. Existen tres niveles de asistencia:

- | Inmediata: para las personas desplazadas recientemente en situaciones de vulnerabilidad aguda que necesitan alojamiento temporal y asistencia alimentaria. Este tipo de asistencia es ofrecida por los municipios hasta que la víctima se inscribe en el registro.
- | De emergencia: una vez en el registro, las personas desplazadas tienen derecho a la asistencia determinada por una evaluación de la urgencia y la gravedad de su situación.
- | Transitoria: los hogares registrados cuyas necesidades no cumplen los criterios de emergencia pueden optar a recibir asistencia transitoria, que incluye programas de sustento.⁶⁰



Panorámica de la comunidad de Nueva Esperanza, en la que llevan viviendo muchos años las familias desplazadas a causa de los conflictos armados en curso. Fotografía © ACNUR / Rubén Salgado Escudero, diciembre de 2017

CUADRO 4: UARIV

La *Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas* (UARIV) fue creada en virtud de la Ley 1488 para supervisar el registro, la asistencia y las indemnizaciones a las víctimas del conflicto armado. Cuando una persona es desplazada, en primer lugar, debe realizar una declaración en la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría o la Personería. Una vez realizado este trámite, debe dirigirse a un centro de atención local de UARIV, donde será atendida por un equipo municipal. Las solicitudes de inclusión en el registro para las víctimas se evalúan a nivel nacional, pero el equipo municipal puede ofrecer asistencia inmediata mientras se esperan los resultados. Tras su inclusión en el registro, la víctima puede optar a recibir apoyo a través de los mecanismos nacionales.

Muchos de los desplazados internos encuestados habían recibido asistencia humanitaria. Fabiana recibió dos millones de pesos (635 dólares, USD) y muebles para su casa. María José al principio recibió asistencia alimentaria y, más tarde, 1,7 millones de pesos (540 dólares, USD). Alexa ha recibido tanto asistencia financiera como apoyo psicológico.

A pesar de la existencia de provisiones completas, otros han recibido menos apoyo. Irene recibió un pago en 2017, pero sigue esperando otros dos ingresos. La familia de Clara se encuentra en una situación similar: debían recibir apoyo financiero tres veces al año, pero únicamente han estado recibiendo un pago.

Hay quienes incluso no han recibido nada en absoluto. Valentina vive en la calle y está inscrita en el registro para las víctimas; sin embargo, le han dicho que necesita renovar sus papeles antes de poder recibir ninguna ayuda. En el día de la entrevista, había gastado sus últimos 4000 pesos (1,3 dólares, USD) en el transporte para desplazarse al centro de atención y había realizado el viaje de vuelta a pie.

A Ana Paula no le queda más que un sentimiento de desesperanza: “No merece la pena meterse en este tipo de procesos de reclamación; pierdes demasiado tiempo y dignidad por una cantidad ínfima”, dice.

INDEMNIZACIÓN

Además de asistencia, el Gobierno ofrece una indemnización económica por los daños sufridos durante el conflicto en un intento por apoyar “el fortalecimiento o la reconstrucción de los proyectos vitales de los afectados”.⁶¹ Los hogares que se han visto obligados a desplazarse tienen derecho a recibir entre 17 y 27 veces el salario mínimo mensual, que aproximadamente equivale a una cifra entre los 4000 y los 6500 dólares (USD). Una persona que ha sufrido un cierto número de situaciones críticas tiene derecho hasta a 40 veces el salario mínimo mensual, es decir, cerca de 9600 dólares (USD).⁶²

Dadas las elevadas cifras de víctimas, el Gobierno necesita encontrar el modo de pagar las indemnizaciones con cierta viabilidad fiscal. Su presupuesto anual no es suficiente para compensar a todas las víctimas de una sola vez, por lo que se han establecido criterios de priorización para los beneficiarios.⁶³

Para las víctimas del desplazamiento, el Gobierno asume que la indemnización tendrá un mayor impacto una vez que se hayan superado las vulnerabilidades relacionadas con la seguridad alimentaria, la vivienda y la salud. Por tanto, para determinar el orden de prioridad de las víctimas, el Gobierno evalúa su estado de vulnerabilidad a través de un cuestionario comprensivo. Quienes no

se consideren en capacidad de cubrir sus necesidades básicas no tendrán prioridad a la hora de recibir una indemnización; en su lugar, seguirán recibiendo asistencia de forma continuada. Aquellos cuyas necesidades básicas estén cubiertas perderán el derecho a asistencia y, en su lugar, tendrán prioridad para acceder a las indemnizaciones. Las víctimas que se encuentran fuera del país se consideran automáticamente prioritarias para recibir una indemnización dado su acceso limitado a otras formas de compensación.⁶⁴

Un total de 962 815 personas han sido indemnizadas a fecha de enero de 2019.⁶⁵ Aunque esta cifra constituye de por sí un gran logro, tan solo constituye un 10% de las víctimas del país. Miles de personas siguen esperando su indemnización y los retrasos en los pagos minan la efectividad de esta generosa oferta. Tan solo uno de los participantes en el estudio, que había regresado desde Brasil, había sido indemnizado por el desplazamiento.

Belén lleva desplazada dieciséis años, pero todavía no ha recibido ningún tipo de asistencia o de compensación. A Martín le dijeron que recibiría su indemnización pronto, pero se muestra escéptico acerca de ello: “No sé cómo ni cuándo la voy a recibir, es como una ilusión. No cuento con ello, es un cuento de hadas”.

Entre los participantes de los centros de atención de UARIV se registra un elevado grado de frustración con el sistema. Muchos de los desplazados internos entrevistados hacen cola desde el amanecer. “No soy un mendigo, ¿por qué tengo que perder mi dignidad de esta manera? Tengo derecho a recibir ese dinero”, se queja Esteban. El proceso también tiene un coste, ya no solo en términos de transporte sino en días de trabajo perdidos. Julieta ha tenido que vender el frigorífico de su casa para poder financiar sus desplazamientos regulares hasta el centro de atención.

RESTITUCIÓN DE TIERRAS

Además de las posibilidades de asistencia y indemnización, quienes perdieron su propiedad debido al conflicto tienen derecho a recuperarla, incluso aunque hubieran sido forzados a venderla. Además, el retorno no constituye un requisito para solicitar este procedimiento. Los desplazados internos pueden solicitar la restitución de tierras sin necesidad de regresar a su región de origen; asimismo, las víctimas que residen en otro país pueden

realizar su petición con el apoyo de la embajada en el país de acogida.⁶⁶ Para iniciar el proceso, en primer lugar, el solicitante debe registrar la propiedad perdida en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. Tras ello, un juez examinará la existencia de posibles demandas concurrentes y tomará una decisión conforme a ello. Los ocupantes secundarios y las personas “de buena fe exenta de culpa” pueden solicitar una indemnización por la pérdida de las tierras restituidas a su propietario original.⁶⁷ Camilo volvió de Venezuela en 2015 y, gracias al apoyo de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), logró recuperar sus tierras: “Recibí muy buen apoyo; me ayudaron incluso a establecer mi propia empresa de producción de cacao”.

Sin embargo, otros fueron presas del miedo a la hora de realizar la solicitud. Sara aún conserva la escritura de su casa, pero no se siente segura solicitando su restitución: “Quien solicita la restitución de tierras se convierte en objetivo militar”, asegura. Mariángel, que declara no querer regresar de todas formas, considera que es inútil solicitarla: “No quiero que me maten por nada”, dice. De hecho, algunos intentos de recuperación de las tierras han conducido a persecuciones y desplazamientos, tal como se indica anteriormente en este informe.

Igualmente, tampoco todos los esfuerzos por reclamar la propiedad han dado sus frutos. A Pedro lo obligaron a vender su granja por un precio muy reducido y lleva décadas luchando por recuperarla. Ignacio poseía antes cuatro porciones de tierra en las que cultivaba yuca, caña de azúcar, judías, patatas y cebollas, pero también ha tenido grandes problemas para recuperarlas. Por ahora, la URT únicamente le ha ofrecido la posibilidad de recuperar una de ellas. La restitución también depende de las condiciones de seguridad en la zona en la que está situado el terreno en cuestión. Si los investigadores no consiguen acceder a él, la restitución no es posible.

Quienes no pueden reclamar sus antiguas viviendas, en ocasiones, tienen la oportunidad de recibir tierras en otro lugar. El acuerdo de paz observa la distribución de tres millones de hectáreas entre agricultores sin tierras, con especial hincapié en las comunidades rurales víctimas del conflicto, incluidos los desplazados internos.⁶⁸

CONCLUSIONES

Durante décadas, los factores del desplazamiento en Colombia han ido desde el conflicto activo hasta la persecución y la extorsión. Los desplazamientos transfronterizos son a menudo el resultado de desplazamientos continuados o persecuciones permanentes, que impiden a los afectados encontrar un lugar seguro en el país. La inseguridad sigue siendo un sentimiento extendido a pesar del acuerdo de paz de 2016, tal como pone de manifiesto la persistencia de los desplazamientos. Colombia cuenta con mecanismos sofisticados para fomentar la implantación de soluciones duraderas, entre los que se incluyen medidas de ayuda humanitaria, indemnizaciones o restituciones de tierras. Sin embargo, estos experimentan una gran sobrecarga debido a la escala de los desplazamientos. Ni la histórica legislación colombiana acerca de los desplazados internos ni el acuerdo de paz de 2016 han permitido todavía el establecimiento de condiciones conducentes a soluciones duraderas para las personas desplazadas

que participaron en el presente estudio. Los desplazados internos, refugiados y refugiados en proceso de retorno que participaron en las entrevistas se enfrentan a importantes retos a la hora de acceder a una vivienda, a un empleo y a servicios básicos. Asimismo, la seguridad sigue siendo una preocupación que, en ocasiones, provoca nuevos desplazamientos. Los participantes en el estudio solo tienen un entendimiento limitado acerca de los mecanismos existentes para implantar soluciones duraderas, lo que sugiere una brecha de información y difusión de la legislación colombiana. Los retrasos en las indemnizaciones son una gran fuente de preocupación, que llega a eclipsar otras oportunidades alternativas de apoyo. Los resultados de este informe también sugieren la necesidad de mayores matices a la hora de estudiar la realidad colombiana que reflejen el conflicto continuado y el desplazamiento. Las narrativas de paz erradas corren el riesgo de poner en peligro la aprobación de solicitudes de asilo y favorecen los retornos anticipados.



Mujeres y niños de la comunidad de Mocoa encienden velas formando la palabra "paz". Fotografía © ACNUR / Rubén Salgado Escudero, diciembre de 2017

NOTAS

1. IDMC, [The Invisible Majority](#), Noviembre de 2017
2. UARIV, [Unidad para las Víctimas alcanzó en 2018 cifra histórica de indemnizaciones](#), Enero de 2019
3. Cantor, D. "Returns of Internally Displaced Persons during Armed Conflict: International Law and its Application in Colombia", International Refugee Law Series 12, p.188
4. Amnesty International, [The Paramilitaries in Medellín: Demobilization or Legalization?](#) Septiembre de 2005.
5. Cantor, D. "Returns of Internally Displaced Persons during Armed Conflict: International Law and its Application in Colombia", International Refugee Law Series 12, p.192
6. IDMC, [Colombia: conflict displacement figures analysis](#), 2018.
7. Reuters, [A fractured peace: Violent rivals rush into FARC void in Colombia](#), Abril de 2018.
8. OCHA briefing on Venezuela crisis in Cúcuta, 16 November 2018; Response for Venezuelans, [Regional Refugee and Migrant Response Plan for Refugees and Migrants from Venezuela](#), Diciembre de 2018.
9. IASC, [Framework on durable solutions for internally displaced persons](#), Abril de 2010
10. World Bank, [Colombia Country Profile](#)
11. UNDP, [Colombia Briefing Note](#), Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update
12. World Bank, [Colombia Country Profile](#)
13. World Inequality Lab, [World Inequality Report](#), 2018
14. World Bank, [Colombia: Rural poverty headcount at national poverty lines](#)
15. United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, [Bienes y Servicios Públicos Sociales en la zona rural de Colombia](#), Abril de 2016
16. Oxfam, [Colombia's Challenge: addressing land inequality and consolidating peace](#), Julio de 2017
17. Colombia Reports, [Understand the causes of Colombia's conflict: Inequality](#), Enero de 2015
18. Business Insider, [Colombia is trying to root out the cocaine trade, but farmers are relying on it as an 'insurance policy'](#), Marzo de 2018
19. Colombia, [Final Agreement to End the Armed Conflict and Build a Stable and Lasting Peace](#), Noviembre de 2016
20. IDMC, [Understanding the root causes of displacement: towards a comprehensive approach to prevention and solutions](#), Diciembre de 2015
21. Colombia Reports, [Illegal armed groups' territories](#), Julio de 2018
22. The Conversation, [FARC's step towards peace in Colombia must not be met with another 'political genocide'](#), Agosto de 2017
23. Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación, [Cuerpos Excluidos, rostros de impunidad: informa de violencia hasta personas LGBT en Colombia](#), 2015.
24. Promotora de Vivienda de Risaralda, [Terminación de las primeras 100 mil viviendas gratis](#), Noviembre de 2015
25. Jesuit Refugee Service, La Ciudad: La Última Frontera para la acción humanitaria: Una aproximación desde el caso de Altos de la Florida, 2017
26. Habitat for Humanity Great Britain, [Housing Poverty in Colombia](#)
27. UNDP, [Colombia: Human Development Indicators](#)
28. International Review of the Red Cross, [Internal Displacement in Colombia: Humanitarian, economic and social consequences in urban settings and current challenges](#), Septiembre de 2009
29. International Labour Organisation, [Trends in informal employment in Colombia: 2008-2013](#), 2014.
30. *Ibid.*
31. Brookings, [Integrating Venezuelans into the Colombian labour market: Mitigating costs and maximizing benefits](#), Diciembre de 2018
32. UNDP, [Colombia: Human Development Indicators](#)
33. United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, [Bienes y Servicios Públicos Sociales en la zona rural de Colombia](#), Abril de 2016
34. Sisbén, [Qué es el Sisbén?](#)
35. UNHCR, [Costa Rica gives refugees opportunities to succeed](#), September 2017
36. UNHCR, [Population Statistics](#)
37. CNN, [Costa Rica overwhelmed with Nicaraguan asylum seekers](#), Agosto de 2018
38. NRC and Victims' Unit, Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Colombiano que Viven en Chile, Panamá, Costa Rica, 2018
39. UNHCR, ACAI, AED, DGME, and Cámara de Comercio de Costa Rica (n.d.) [Vivir la Integración](#)
40. NRC and Victims' Unit, Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Colombiano que Viven en Chile, Panamá, Costa Rica, 2018
41. *Ibid.*
42. UNHCR, [Información para solicitantes de la condición de refugiado y refugiados en Costa Rica](#), 2006
43. NRC and Victims' Unit, Caracterización de Víctimas del Conflicto Armado Colombiano que Viven en Chile, Panamá, Costa Rica, 2018.
44. FGD with Colombian refugees and asylum seekers in Costa Rica, Noviembre de 2018
45. Redes Colombia, [Retorno Solidario](#)
46. Interview with UARIV's victims abroad unit in Bogotá, Noviembre de 2018
47. Colombia, [Final Agreement to End the Armed Conflict and Build a Stable and Lasting Peace](#), Noviembre de 2016
48. Colombia Nos Une, [Lo que usted debería saber sobre la Ley Retorno: la Ley de los colombianos que regresan del exterior](#)
49. Human Rights Watch, [Unchecked power: police and military raids in low-income and immigrant communities in Venezuela](#), Abril de 2016.
50. OCHA briefing on Venezuela crisis in Cúcuta, 16 November 2018 ; Response for Venezuelans, [Regional Refugee and Migrant Response Plan for Refugees and Migrants from Venezuela](#), Diciembre de 2018
51. Interview with Colombian Embassy staff in Costa Rica, Noviembre de 2018
52. Cantor, D. "Returns of Internally Displaced Persons during Armed Conflict: International Law and its Application in Colombia", International Refugee Law Series 12, p.342.
53. UNDP, [Human Development Reports: Homicide Rate](#)
54. Amnesty, [Still an unprotected peace](#), 2018; Verdad Abierta, [¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo](#), 2018
55. Victims' Registry, [people affected by year](#).
56. Colombia, [Law 387 of 1997](#)
57. Cantor, D. "Returns of Internally Displaced Persons during Armed Conflict: International Law and its Application in Colombia", International Refugee Law Series 12, p.198
58. Colombia, [Law 1448 of 2011](#)
59. Colombia, [Final Agreement to End the Armed Conflict and Build a Stable and Lasting Peace](#), Noviembre de 2016
60. Colombia, [Law 1448 of 2011](#)
61. UARIV, La Indemnización Administrativa a Víctimas del Conflicto Armado. ¿Qué es, como se entrega y a quién?
62. *Ibid.*
63. *Ibid.*
64. *Ibid.*
65. UARIV, [Unidad para las Víctimas alcanzó en 2018 cifra histórica de indemnizaciones](#), Enero de 2019
66. Unidad de Restitución de Tierras, [Ruta Víctimas en el Exterior: Atención a víctimas del despojo y abandono forzado de tierras que se encuentran en el exterior](#)
67. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural [¿Cómo puedo participar en el proceso de restitución de tierras si mi predio esta solicitado en restitución?](#)
68. Colombian Ministry of Agriculture and Rural Development, [Tierras Para Todos](#); Colombia, [Final Agreement to End the Armed Conflict and Build a Stable and Lasting Peace](#), Noviembre de 2016



The Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) is the leading source of information and analysis on internal displacement worldwide. Since 1998, our role has been recognised and endorsed by United Nations General Assembly resolutions. IDMC is part of the Norwegian Refugee Council (NRC), an independent, non-governmental humanitarian organisation.

The Internal Displacement Monitoring Centre
3 rue de Varembé, 1202 Geneva, Switzerland
+41 22 552 3600 | info@idmc.ch

www.internal-displacement.org

 www.facebook.com/InternalDisplacement

 www.twitter.com/IDMC_Geneva